

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 122 DE 2012 CÁMARA.

mediante la cual se modifica el numeral i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., octubre 31 de 2012.

Señor Presidente

Comisión Primera Constitucional Permanente

GUSTAVO HERNÁN PUENTES DÍAZ

Honorable Representante

Honorable Cámara de Representantes

E.S.D.

Asunto: Informe de ponencia para primer debate al **Proyecto de ley número 122 de 2012 Cámara**, mediante la cual se modifica el numeral i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

Respetado Señor Presidente:

En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y en obediencia al Reglamento del Congreso de la República según el artículo 153 de la Ley 5ª de 1992; presentamos ante usted informe de Ponencia para primer debate al proyecto de ley del asunto, en los siguientes términos:

I. Sinopsis

La presente ley tiene por objeto pretender evitar que se sigan presentando conflictos de interpretación de jueces y abogados en torno a los términos de caducidad para la presentación de acciones de reparación directa por delitos considerados de lesa humanidad, igualmente por la categoría de los delitos y por el traumatismo que estas acciones delictuales generan en los afectados, y en la sociedad en general, se hace necesario ampliar el término de caducidad para que quienes hayan resultado afectados por este tipo de violaciones puedan ejercer su derecho de reclamar la reparación por los daños causados.

II. Trámite

El proyecto de ley número 122 de 2012 Cámara, mediante la cual se modifica el numeral i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones; presentado por el honorable Representante a la Cámara, Carlos Enrique Ávila Durán de la Comisión Séptima, reemplazo permanente; representa al Departamento del Magdalena, adscrito al partido Político de Integración Nacional PIN, proyecto radicado ante la Secretaría General de la Corporación, el Radicado el 9 de junio de 2012 y publicado el día 9 de septiembre de 2012 en la **Gaceta del Congreso** número 601 de 2012; que por asunto de materia fue radicado en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la honorable Cámara de Representantes, de conformidad a los términos del articulado del reglamento; la mesa directiva en ejercicio de sus funciones me designó como ponente coordinador al primer debate.

III. Antecedentes, objeto y contenido del proyecto de ley

El presente proyecto de ley modificatorio del numeral i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, pretende evitar que se sigan presentando conflictos de interpretación de jueces y abogados en torno a los términos de caducidad para la presentación de acciones de reparación directa por delitos considerados de lesa humanidad, igualmente por la categoría de los delitos y por el traumatismo que estas acciones delictuales generan en los afectados, y en la sociedad en general, se hace necesario ampliar el término de caducidad para que quienes hayan resultado afectados por este tipo de violaciones puedan ejercer su derecho de reclamar la reparación por los daños causados.

De acuerdo con la Exposición de Motivos, el proyecto de ley propone evitar que se sigan presentando conflictos, de interpretación tanto de jueces como de abogados en torno a los términos de caducidad para la presentación de acciones de reparación directa por delitos considerados de lesa humanidad e igualmente por el traumatismo que estas acciones delictuales generan en los afectados, y en la sociedad en general, siendo necesario ampliar los términos de caducidad para cada una de las personas que hayan sido afectadas por este tipo de violaciones pudiendo entonces ejercer el derecho de reclamar la reparación por los daños causados.

Para ello el autor del proyecto se estructura en la en Sentencia C-401 de 2010, sobre la *Potestad de Configuración Legislativa en Materia Procesal* el cual la honorable Corte Constitucional se manifestó en los siguientes términos: *¿Esta Corporación ha puntualizado que el establecimiento de términos que predeterminan el normal trámite de los procesos judiciales o administrativos, es un desarrollo claro de la cláusula general de competencia del Congreso para hacer las leyes y que la Constitución le ha conferido al Legislador un amplio margen de configuración política de los procedimientos, puesto que con ello no sólo pretende otorgar un alto grado de seguridad jurídica a los administrados, sino también busca la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Carta. Así, de acuerdo con la jurisprudencia, ¿(¿) la regulación de los procedimientos judiciales, su acceso, etapas, características, formas, plazos y términos es atribución exclusiva del legislador, el cual goza para tales efectos de un amplio margen de configuración tan sólo limitado por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto estas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales¿. (La cursiva es del autor).*

De igual forma el autor honorable Representante Carlos Enrique Ávila Durán, acoge planteamientos expresados por los miembros de la Sección Segunda Subsección ¿A¿ de la Sala de lo Contencioso Administrativo en fallo de tutela dictado el pasado 20 de junio de 2011, fecha posterior a la sanción de la Ley 1437 de enero de 2011, en el cual precisamente se dirime la caducidad o no de la acción de reparación por un delito (homicidio en persona protegida) de lesa humanidad diferente a la Desaparición Forzada, en la que los honorables Magistrados^[1][1], expresaron:

¿ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. Caducidad en delitos de lesa humanidad/ DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Caducidad. Conteo de la caducidad desde ejecutoria de fallo penal/PRINCIPIO PRO DAMATO. Concepto/PRINCIPIO PRO ACTIONI. Concepto/ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Vulneración por conteo de caducidad en delitos de lesa humanidad/DEBIDO PROCESO- Vulneración por conteo de caducidad en delitos de lesa humanidad (Negrilla autor del proyecto)¿.

El juez de primera instancia se atuvo al tenor literal del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y como consecuencia de lo allí expresado, tomó la decisión que ahora es materia de la acción de tutela. Sin embargo, las circunstancias que rodearon la muerte del joven Nelson Abad Ceballos Arias, que no es necesario repetir y la posterior aparición del cadáver e identificación, permiten a la Sala llegar a una conclusión diferente a la que arribó el juzgador de primera instancia, respecto de la caducidad frente a las particulares circunstancias que rodearon los hechos. El delito por el que fueron condenados los integrantes del Ejército Nacional, se denomina ¿homicidio en persona protegida?, figura relativamente nueva en la legislación penal, por cuanto sólo con la expedición de la Ley 599 de 2000 se introdujo. Por lo anterior, la norma transcrita no se adecuaba a las particularidades del caso teniendo en cuenta que el Código Contencioso Administrativo, fue expedido en el año de 1984 (Decreto 01), fecha anterior a la antes señalada y de allí en adelante tuvo algunas modificaciones en esa materia.

En efecto, en el año 2000, se adicionó el inciso 2° al numeral 8 del artículo 136, con el fin de establecer el término de caducidad de la acción de reparación directa tratándose del delito de desaparición forzada, delito que al igual que el de ¿homicidio en persona protegida? fue introducido en la reforma al Código Penal del año 2000. Es decir, que hasta el año 2000, no había una norma que estableciera cómo o desde cuándo se empezaba a contar el término de caducidad en los asuntos de responsabilidad por el delito de ¿desaparición forzada? **como tampoco la había ni la hay en la actualidad para el de ¿homicidio en persona protegida?** Por lo mismo, no era posible aplicar el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, acudiendo solamente a su tenor literal, pues el juez no podía, sólo con fundamento en la fecha de la denuncia por la muerte de la víctima y so pretexto de la falta de desarrollo legal en relación con la contabilización del término de caducidad, tratándose de delitos de lesa humanidad como el que ocupa la atención de la Sala, impedir el acceso a la administración de justicia o sustraerse del conocimiento de los asuntos que por ley le han sido asignados. Lo anterior, por cuanto se trata de delitos que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario que requieren de la especial atención del Estado y respecto de los cuales es difícil determinar una fecha de caducidad, como en el presente caso que el juez consideró que empezó a correr en el año 2004 a pesar de la imposibilidad jurídica por cuanto el cadáver aún no había sido identificado (sólo lo fue en el año 2006, cuando por pruebas de ADN fue reconocido) y a pesar de que en el desarrollo de la conducta (primero fue sacado a la fuerza de su casa, posteriormente asesinado, luego reconocido y por último la sentencia de condena en el proceso penal), hay otras fechas que bien podrían tomarse como referentes para efecto de determinar el momento a partir del cual comenzaría a contarse el término de caducidad de la acción. En tales hipótesis, la Sección Tercera de la Corporación ha dado aplicación a los principios pro damato y pro actioni. Según el primero de los principios señalados, se debe dar aplicación a la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad y sus derechos, especialmente si son derechos protegidos e inversamente a la más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos. El segundo, es el derecho a ser oído por un juez y para el efecto, se deberán interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción. Por lo anteriormente expuesto y aunque referido a un delito diferente, es del caso resaltar que con la modificación

introducida al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo precisamente se pretendió evitar que el término de caducidad en la forma en que se encontraba consagrado, afectara la posibilidad de reparación en delitos de lesa humanidad, concretamente el de desaparición forzada y para el efecto se ampliaron las hipótesis a partir de las cuales se empezaría a contar.

(...)Tratándose de delitos de lesa humanidad, como lo dispone el inciso 2° del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, nada obsta para que en defensa del derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia y la misma garantía del derecho universal al debido proceso, dadas las circunstancias particulares que rodearon los hechos denunciados en la presente acción de tutela, la caducidad de la acción empiece a contarse desde la eje cutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. En el asunto objeto de examen la parte actora solicitó la celebración de una audiencia de conciliación prejudicial el 17 de marzo de 2010, como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de reparación directa contra el Ministerio de Defensa Nacional y la sentencia de segunda instancia, dentro del proceso penal se profirió el 28 de octubre de 2010. En consecuencia, la eventual acción a intentar no se encontraba caducada como quiera que el acuerdo conciliatorio se realizó el 21 de junio de 2010. Las razones que anteceden son suficientes para concluir que de los hechos señalados en el escrito de tutela, se deriva la violación del derecho fundamental al debido proceso y el fundamental de acceso a la administración de justicia. (Negrilla fuera de texto).

Es entonces que a la lectura e interpretación de las anteriores consideraciones el autor de esta iniciativa ve la necesidad de la expedición de una norma legal que regule la caducidad de la acción de reparación en aquellos delitos encuadrados como de lesa humanidad, o violatorio de los derechos humanos.

El autor de la iniciativa legislativa en la exposición de motivos presenta el siguiente cuadro comparativo de conformidad a la normatividad vigente:

Texto del proyecto	Ley 1437 de 2011
<p>Artículo 1.º Modifíquese el numeral i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así;</p> <p>i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.</p>	<p>Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:</p> <p>1. ... 2. ... a) ... c)</p> <p>i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.</p> <p>Sin embargo, el término para formular la pretensión</p>

Texto del proyecto	Ley 1437 de 2011
<p><i>Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada de delitos, tales como desaparición forzada, desplazamiento forzado, torturas, homicidios, presión o persecución a grupos o colectividades por razones</i></p>	<p><i>de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado</i></p>
<p><i>políticas, religiosas, raciales, étnicas, culturales, o de género, homicidio en persona protegida, la prostitución forzada o cualquier otro punible que en concordancia con la Ley 742 de 2002, se entienda comprendido dentro de la calificación de delito de lesa humanidad, la caducidad será de tres (3) años.</i></p> <p><i>En el caso de la desaparición forzosa, los tres (3) años, serán contados a partir de la fecha en que aparezca la víctima, o en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal correspondiente.</i></p> <p><i>En los otros delitos de lesa humanidad, los tres (3) años serán contados, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal correspondiente.</i></p> <p><i>Todo ello sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos.</i></p>	<p><i>en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.</i></p>
<p><i>Artículo 2°. Derogatorias. Lo dispuesto en esta ley, deroga todas las normas que le sean contrarias.</i></p>	
<p><i>Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.</i></p>	

De igual manera el honorable Representante Ávila Durán, hace referencia en la exposición de motivos en la constitucionalidad y legalidad del proyecto amparándose en el artículo 150 de la Constitución Política, el cual establece que el Congreso de la República es el encargado de hacer las leyes, precisa también los 154 y 156 referenciándolos de la siguiente manera:

¿El artículo 154 de nuestra Carta Política, dispone que ¿las leyes puedan tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular?¿

En este mismo contexto el Autor del proyecto de ley presenta como soporte jurídico el artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª de 1992, ¿por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes¿ artículo que insta a que los Senadores y Representantes a la Cámara, individualmente y a través de sus bancadas, pueden presentar proyectos de ley, arguye[2][2] que las materias incluidas en el proyecto de ley están relacionadas de manera razonable y equánime y conciernen con el título de la iniciativa, por lo tanto, cumple los requisitos exigidos en los artículos 158 y 169 de la Carta Política.

Así mismo, manifiesta que en el contenido del proyecto, no se vislumbra que se trate de una norma que por disposición expresa del artículo 154 de la Constitución Política sea de iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional.

El texto del proyecto está estructurado por un total de tres (3) artículos, incluidos los de derogatorias y vigencias, siendo el artículo 1º el punto de partida de la discusión en su primer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente de Cámara de Representantes. El texto del proyecto de ley es como sigue:

Artículo 1º. Modifíquese el numeral i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así;

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada de delitos, tales como desaparición forzada, desplazamiento forzado, torturas, homicidios, presión o persecución a grupos o colectividades por razones políticas, religiosas, raciales, étnicas, culturales, o de género, homicidio en persona protegida, la prostitución forzada o cualquier otro punible que en concordancia con la Ley 742 de 2002, se entienda comprendido dentro de la calificación de delito de lesa humanidad, la caducidad será de tres (3) años.

En el caso de la desaparición forzosa, los tres (3) años, serán contados a partir de la fecha en que aparezca la víctima, o en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal correspondiente.

En los otros delitos de lesa humanidad, los tres (3) años serán contados, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal correspondiente.

Todo ello sin perjuicio, de que la demanda con tal pretensión, pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos.

Artículo 2º. Derogatorias. Lo dispuesto en esta ley, deroga todas las normas que le sean contrarias.

Artículo 3º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.

IV. Consideraciones frente al proyecto de ley

En la exposición de motivos el parlamentario aporta una sentencia del **Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A** Consejero ponente: **Alfonso Vargas Rincón** fecha, veinte (20) de junio de dos mil once (2011). Radicación número: 11001-03-15-000-2011-00655-00(AC), de Acción de Reparación Directa. Leída está el Consejo de Estado falla con base en el inciso 2° al numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo artículo que transcribo:

Artículo 136. Caducidad de las Acciones. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:><Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:>

1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto.

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

3. La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Agraria, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, caducará en dos (2) años, contados desde el día siguiente al de su publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás casos. Para los terceros, el término de caducidad se contará a partir del día siguiente de la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos.

5. La acción de revisión contra los actos de extinción del dominio agrario o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación de los baldíos deberá interponerse dentro de los quince (15) días, contados a partir del día siguiente de su ejecutoria. Para los terceros, el término de caducidad será de treinta (30) días y se contará a partir del día siguiente a la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos.

6. La acción de expropiación de un inmueble agrario deberá presentarse por el Incora dentro de los dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la resolución que ordene adelantar la expropiación.

7. Cuando una persona de derecho público demande su propio acto la caducidad será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de su expedición.

8. **La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.** <o:p>

<Inciso adicionado por el artículo 7° de la Ley 589 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:>Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que

aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

9. <Aparte subrayado Condicionalmente Exequible> La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad.

10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;

c) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;

d) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;

e) <Literal condicionalmente Exequible> La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años, contados a partir de su perfeccionamiento. En ejercicio de esta acción se dará estricto cumplimiento al artículo 22 de la ley ¿por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia¿.

f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes dentro de los dos (2) años, contados a partir de su perfeccionamiento.

11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.

12. La acción electoral caducará en veinte (20) días, contados a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se trata. Frente a los actos de

confirmación, el término de caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la designación o nombramiento.

Parágrafo 1°. Cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables la acción no caducará.

Parágrafo 2°. Los actos de extinción del dominio de bienes distintos a los regulados por la Ley Agraria deberán ser demandados dentro de los mismos términos señalados para estos.

Como se puede observar el inciso 2° del numeral 8 de este artículo es el mismo texto del inciso 2° del literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

De esta argumentación considero que se hace necesario la modificación y complemento al literal i) del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, para proteger en cuanto a la reparación directa a las víctimas de delitos de lesa humanidad.

V. Proposición

Con fundamento en las consideraciones expuestas proponemos a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar Primer Debate al **Proyecto de ley número 122 de 2012 Cámara, ¿mediante la cual se modifica el numeral i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones¿**, con la siguiente modificación del título del proyecto: **Proyecto de ley número 122 de 2012 de la Cámara de Representantes, ¿Mediante el cual se modifica y se adicionan dos incisos al literal i) del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones¿**.

Título original del proyecto de ley

¿Mediante la cual se modifica el numeral i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones¿.

En razón a que el Autor del proyecto esta precisando una estructura de varios ítem y este se identifica con la letra (i) por consiguiente es una letra y no un número; lo anterior de conformidad a las siguientes definiciones así: Numeral: es la representación gráfica o simbólica del número y literal es relativo a la letra.

Título propuesto:

¿mediante el cual se modifica y complementa el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y se expresan otras disposiciones¿.

TÍTULO DEL PROYECTO Y TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 122 DE 2012 CÁMARA

mediante el cual se modifica y complementa el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y se expresan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese y compléntese el literal i) **del numeral 2** del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará de la siguiente manera;

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante

tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

*Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada de delitos, tales como desaparición forzada, desplazamiento forzado, torturas, homicidios, presión o persecución a grupos o colectividades por razones políticas, religiosas, raciales, étnicas, culturales, o de género, homicidio en persona protegida, la prostitución forzada o cualquier otro punible que en concordancia con la Ley 742 de 2002, se entienda comprendido dentro de la calificación de delito de lesa humanidad, **la caducidad será de tres (3) años.***

*En el caso de la desaparición forzosa, los tres (3) años, serán **contados** a partir de la fecha en que aparezca la víctima, o en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal correspondiente.*

En los otros delitos de lesa humanidad, los tres (3) años serán contados, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal correspondiente.

Todo ello sin perjuicio, de que la demanda con tal pretensión, pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos.

Artículo 2°. *Derogatorias.* Lo dispuesto en esta ley, deroga todas las normas que le sean contrarias.

Artículo 3°. *Vigencia.* La presente ley rige a partir de su promulgación.

Rubén Darío Rodríguez Góngora,
Representante a la Cámara.
Ponente.

[1][1] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección 4ª
Consejero Ponente: ALFONSO VARGAS RINCÓN fecha, veinte (20) de junio de dos mil once (2011).
Radicación número: 11001-03-15-000-2011-00655-00(AC):

[2][2] Carlos Enrique Ávila Durán, Autor del Proyecto.